



LEGISLATURA  
DEL ESTADO

Presidente.

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- Con su permiso Señor

EL PRESIDENTE.- Adelante Señor Diputado.

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- Da lectura a la Minuta de Decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es en cuanto a la Minuta Proyecto de Decreto, a continuación daré lectura al Dictamen.

EL PRESIDENTE.- Por favor Diputado.

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- Da lectura al Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, mediante el que se reforma y adiciona los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias señor Diputado.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Si Diputado.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, quisiera dar mi punto, y voto particular sobre el Dictamen.

EL PRESIDENTE.- Bien Diputado con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de nuestra Ley Orgánica del Municipio, puede usted hacer uso de la palabra, en lo inteligencia de que dicho voto particular debe de ser por escrito y entregado a esta Presidencia.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Con su permiso señor.

EL PRESIDENTE.- Adelante Diputado.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Honorable Legislatura, el voto particular del Partido de la Revolución Democrática sobre el proyecto de reformas y adiciones a los artículos 16, 20, 21, y 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma propuesta ha despertado una gran atención en la opinión pública, ha sido materia de debate en los medios informativos, se han pronunciado sobre ella algunos Juristas, Políticos, Organizaciones no Gubernamentales, Académicos, el amplio espectro de la Sociedad Civil y el punto de convergencia a sido el de considerar a esta reforma como profundamente, lesiva de la seguridad jurídica de los mexicanos, y como acción que se pretende hacer jurídico lo que antes se hacia ya al margen de la Ley, es el espionaje electrónico, la irrupción en la impunidad, el asedio a presuntos enemigos sociales, abordar las Garantías Constitucionales vinculadas al proceso penal, es sin lugar a dudas, situarnos en la frontera critica de los Derechos Humanos, el escenario tiene contendientes profundamente desiguales, de una parte el Estado y su aparato de represión personificados en el Ministerio Público, que en nombre y representación de la sociedad y que amparan en la fuerza compulsiva de la acusación y en los sentimientos de la solidaridad con la víctima y de la otro, simple protesta de inocencia de una persona, por ello, la contienda entre el ciudadano y el acusador a constituido siempre una situación delicada donde el autoritarismo puede significar graves reveses a la dignidad de los seres humanos, no por nada se ha dicho que la historia de las libertades públicas es en gran parte la historia de las Garantías Constitucionales del Derecho Penal, consideramos ahora que la propuesta de reformas a los artículos 16 y 20 de la Constitución, el artículo 16 Constitucional se adiciona dos párrafos como noveno y décimo, en ello se pretende legitimar un grave atentado a la libertad personal al autorizarse que la autoridad Judicial y Federal a petición de la Autoridad Federal que faculte la Ley o el Titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, para conservar la Ley y el orden se nos ha dicho es necesario esta adición en el artículo 16 Constitucional y no podemos evitar recordar que el imperio de la Ley, el orden a sido siempre pretexto de dictadores e inicio de nefastos gobiernos dictatoriales, en los hechos esta pretendida reforma constituye por la ausencia de los límites de derecho y la razón aconsejan el fortalecimiento del Poder del Estado y la restricción de la Seguridad Jurídica y la libertad personal, se escriben en la lógica de la reducción las garantías individuales iniciadas el sexenio del querido Presidente priista Carlos Salinas de Gortari, advertimos que el propio texto propuesto autoriza que la solicitud de las intervenciones a las Comunicaciones Privadas se realicen a petición de una autoridad Federal que faculte la Ley, sin embargo, como dicha Ley aun no existe y dentro de las autoridades que de ordinario se encarguen de estos menesteres se encuentra la Secretaria de Gobernación y la





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

propia Secretaría de la Defensa Nacional y por tal no hemos encontrado una razón suficiente para que no se haya establecido con claridad que solamente el Ministerio Público Federal o el Titular del Ministerio Público Federal de las Entidades Federativas podrían solicitar a las, a la autorización exclusivamente en el caso directivo contra el crimen organizado, también debe significarse que el texto Constitucional no limita como se ha declarado hasta la saciedad, que las posibles intervenciones de las Comunicaciones Privadas solo serán autorizadas en caso de que se trate de combate a la delincuencia organizada, la redacción del texto presenta varios inconvenientes, uno; posibilita que el espionaje de las comunicaciones se lleve a cabo para la investigación de los delitos o para cualquier otra finalidad determine el legislador ordinario, si de aprobarse el texto propuesto se permitiera que organismos encargados del espionaje político como el CINSEN, alegando razones de Seguridad Nacional practiquen el espionaje de las Comunicaciones, ello significaría instauran un sistema inquisitorial en vez de persecutorio que consagra nuestra Constitución, dos; se dejara abierta la puerta para que la Cámara de Diputados Federal confiera autorización genérica para intervenir en la comunicación privada aún cuando el medio no es el ideal para la investigación de los delitos, tres; la utilización de instrumentos que puedan servir para la intervención de las Comunicaciones Privadas construirán de aprobarse registros en valor probatorio, a pesar de como es bien sabido, resulta realmente sencillo editar o alterar las, los registros de las comunicaciones en su sentido, sentida fecha de interlocutores como lo demuestra entre otros en la ahora celebre de Aguas Blancas del Estado de Guerrero, cuatro; con pésimas técnica Legislativa se hace enumeración de las materias en las que no podrá otorgarse autorización para intervenir en la comunicación privada, refiriéndose expresamente a las materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral y administrativo y en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor, la forma jurídicamente adecuada sería solo en materia penal cuando se trate de investigaciones relativas a la delincuencia organizada, hubiera superado mucho a la ambigua utilizada por el proyecto propuesto, ya que se dejaron fuera materias tales como la agrario, lo contencioso administrativa y otras, y equivocadamente se refiere solo a las cosas del detenido con su defensor, lo que podría significar que en caso de no estar detenido, el legislador ordinario se podría autorizar la intervención de la comunicación entre el defensor y el defenso, cinco; indebidamente se deja a la Cámara de Diputados Federal solamente el ocuparse de establecer los requisitos y limites de la intervención a las Comunicaciones Privadas cuando esto deberá hacerse materia suspensiva del texto Constitucional pues de acuerdo con el artículo primero de la Ley fundamental la restricción y sus funciones de garantía solo se darán en los casos en las condiciones que ella misma establezca, por lo anterior nos induce al voto en contra ya que de ninguna manera podemos aceptar que la Legislación ordinaria establezca candados al texto Constitucional, esto es sencillamente contrario a la naturaleza y a la filosofía de las garantías Constitucionales, que en esencia pone limites al Poder Público para salvaguardar la esfera política de los particulares, en lo que se refiere al artículo 20 Constitucional, fracción I que establece tres reglas en la que se atañe la libertad provisional bajo caución, una de las de carácter penal que autoriza este beneficio a quien no sean acusados por delitos graves y dos; reglas adicionales que limitan, alcance de reglas generales, las anteriores reglas transitan de un criterio objetivo ampliamente válido por la tradición jurídica mexicana y que confirmar la excepcionalidad de la prisión preventiva y otro que abre posibilidades discrecionales sobre la libertad





H. LEGISLATURA  
DEL ESTADO

provisional del inculpado, ya que aleja al beneficio la libertad provisional a quien haya sido condenado con anticipación por el delito grave, es decir, hacer una preincidencia, motivo para alimentar el derecho procesal, la presición preventiva se encuentra severamente cuestionada, ya que consiste en mantener en prisión durante el proceso penal a una persona de la cual no tenemos certeza que merezca estar en prisión por ello la doctrina que justifica la certeza de esta institución lo hace sobre la base de independencia de las consideraciones teóricas y la realidad social exige para garantizar la eficacia del proceso penal, restringir las libertades personales del encausado y alegan que estos deben de ser la excepción a la regla de ninguna persona, debe de ser privada en su libertad provisional sin que se le haya seguido un procedimiento legal respectivo es decir, se trata de una típica medida precautoria del enjuiciamiento penal, este sería el voto particular del Partido de la Revolución Democrática, en lo cual creemos que la opinión pública tanto nacional como en nuestro Estado ha estado muy al pendiente de estas reformas y adiciones, a lo cual volvemos a reiterar es altamente peligroso de que se esta legislando precisamente para poder facultar o supuestamente reglamentar ya el espionaje telefónico que todos sabemos sin que se reglamentara se daba y sobre todo hay, yo creo, pruebas que así lo ven, sobre todo aquí en Zacatecas de que ya el espionaje telefónico se estaba dando y con esto, con esta nueva Legislación, creemos que estaríamos aún más en el peligro de que nuestra privacidad este por capricho o por la decisión de algunas personas, que no solamente esta va con el crimen organizado, sabemos bien de que sobre todo haciendo uso de los Derechos Políticos, en sus Derechos Políticos a veces lo hacen a uno o lo sitúan a uno.....

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Si Diputado.

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- Yo creo que el Diputado Hugo Esparza ya expuso su voto particular el cual debe de remitir por escrito a la Presidencia a su digno cargo, si tiene la intención de participar dentro de la discusión en lo general, pues será en otro momento.

EL PRESIDENTE.- Gracias Diputado, y Diputado Hugo Esparza le suplicamos efectivamente se concrete a lo que acaba de leer como esta estipulado en el artículo 60 y por cierto les pido una disculpa yo dije artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio y lo correcto es artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Esta bien señor Presidente ya tendremos la oportunidad de participar.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias Diputado, con fundamento en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el voto particular que ha presentado el Señor Diputado Hugo Esparza García, queda registrado en el diario de los Debates y se agrega al expediente respectivo, Honorable Asamblea a continuación se somete a discusión el lo general el referido Dictamen los oradores que deseen intervenir favor de inscribirse en esta Mesa.

Francisco Javier.

EL DIP. MUÑOZ VALENZUELA.- Muñoz Valenzuela

EL PRESIDENTE.- En contra o a favor.

EL DIP. MUÑOZ VALENZUELA.- A favor.

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- A favor.

LA DIP. DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.- Señor Presidente, Domínguez González Guadalupe en contra.

EL PRESIDENTE.- En favor o en contra.

Presidente.

LA DIP. DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.- En contra señor

contra.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Esparza García Hugo en

cierra....

EL PRESIDENTE.- Bien no habiendo más solicitudes se





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

EL DIP. TREJO REYES.- Trejo Reyes José Isabel, a favor.

EL DIP. GUERRERO CHÁVEZ.- En contra.

EL DIP. HUERTA ENRÍQUEZ.- A favor.

EL PRESIDENTE.- Bien si no hay más inscripciones se cierra la inscripción y se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe Domínguez, para que, su intervención en contra.

LA DIP. DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.- Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados mi voto en contra de este, de estas adiciones y reformas propuestas obedece a el hecho de que si bien es cierto de que la delincuencia organizada a modernizado sus métodos de acción y ejecución, las autoridades requieren participar con más sofisticados sistemas de ataque, esta nueva relación vulnera el derecho a la privacidad ya que deja abierta la posibilidad de que estas reformas propuestas puedan ser violados los derechos de ciudadanos inocentes, confiable seria la justicia mexicana si en lugar de condenar al detenido efectivamente juzgar al culpable pero la chocante relación entre la justicia y el pueblo nos demuestra que aún no es tiempo de implementar este tipo de medidas en particular, las intervenciones telefónicas y la rudeza en los métodos de la aplicación de la justicia, Es cuanto señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias ciudadana Diputada. Se le concede ahora el uso de la voz al Diputado Muñoz Valenzuela quien solicito hablar en favor.

EL DIP. MUÑOZ VALENZUELA.- Con su permiso  
Diputado Presidente.

EL PRESIDENTE.- Adelante Diputado.





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

EL DIP. MUÑOZ VALENZUELA.- Honorable Asamblea el tiempo que hoy estamos viviendo esta marcado de un sin número de sucesos que han venido a alertarnos sobre el peligro que vive no solamente nuestro país sino que prácticamente el mundo entero, existe una enfermedad a nivel mundial que le dan el calificativo de una pandemia, delitos como el narcotráfico, tráfico como de menores, son males tan perversos que han corrido grandemente a nuestra sociedad y han puesto en peligro la estructura política de los países por lo tanto creo yo que es valido el que echemos a andar en la justicia, en la Legislación, los principios biológicos que rigen al mundo microscópico, me estoy refiriendo a esa lucha que desde hace años esta librando los seres vivos, el hombre en particular, contra los microbios, contra los agentes causales de enfermedades que lo afectan y los crímenes de la delincuencia organizada son precisamente eso, enfermedades letales cuando el hombre descubre o inventa un antibiótico para contrarrestar aquel microorganismo, pasado un tiempo aquel microbio elabora una encima, crea una defensa y se vuelve resistente, sin más ni menos eso es lo que a mi mente trae, lo que esta pasando hoy con ese tipo de delitos, con ese tipo de gente malosa, que se ha organizado de tal forma, como para poner en peligro la viabilidad de un país o de varios países, por tanto, ese término de seguridad jurídica que empleaba el compañero Esparza García, creo que la seguridad jurídica así como estamos, existe, pero solamente para un sector de la población, para los criminales, porque cuando no está debidamente legislado, ellos de todas maneras usan el espionaje telefónico y el espionaje a muchos niveles, y lo usan desde luego para su bien, sin embargo, la autoridad, aunque pueda estar usando también ese tipo de métodos, no los puede utilizar para poder parar a los criminales, porque legal y judicialmente no son válidos cuando no se ha seguido una petición formal, a través de las vías legales, como para que pueda ser válido aquel recurso, por tanto, yo creo que estos métodos, no pueden ser como dijo la Diputada, sino que son de hecho un peligro para toda la sociedad, pero especialmente cuando no se esta legislado, porque repito, no pueden ser, son, no podemos tapar el sol con un dedo y pensar que de hecho esas situaciones existen, existen y son palpables, también ya lo decía el Diputado Hugo, que en Zacatecas ya se escuchó, se escucharon varias muestras de que de hecho existe, por que no mejor legislar al respecto y delimitar responsabilidades, delimitar de cuando si se puede, cuando si se debe, para que aquello sea válido, para que podamos por lo menos hacer el intento de atarle las manos a quien está devorándose a la sociedad entera, estas reformas Constitucionales darán sin duda cabida para que otras leyes, por cierto esas aquí mismo el Diputado García hacia alusión que no se daba exactamente cuenta a que ley se refería, pues existe la Ley para la Coordinación Nacional en materia de Seguridad Pública o la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y otras que sin duda son accesorias de nuestra Ley fundamental de nuestro país, por tanto yo doy mi voto a favor porque estaremos en el camino de brindarle lo que dice nuestra Constitución, un orden social y también por que no una Patria ordenada. Es cuanto Diputado Presidente.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias, Diputado su intervención ha quedado debidamente registrada en este Diario de los Debates. Se le concede ahora el uso de la palabra para hablar en contra a Hugo Esparza García, se les





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

recuerda a los Diputados que el máximo de tiempo será de 10 minutos para cada intervención.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Con su permiso Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Adelante Diputado.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Voy referir exclusivamente creo que inclusive a nivel nacional, las reformas y adiciones que aquí se está discutiendo donde ha habido mayor polémicas precisamente en el Artículo 16, sobre todo la preocupación sobre los famosos espionajes telefónicos la intervención telefónica implica por principio una intromisión que violenta el ámbito de la vida privada de los individuos, además con una policía que por regla general no investiga y que es susceptible de corruptelas, no existe ninguna certeza de que esta actividad no derive de actos de exhortación en contra de la ciudadanía en un país en el que la policía es tanto o más, más temida que los propios delincuentes, con modificaciones como esta no se, no se incrementa la seguridad sino el grado de indefensión ciudadana frente a estos cuerpos represivos, esta situación no sólo es abiertamente incompatible en un régimen de plena vigencia de las garantías Constitucionales sino que además contradice diversos instrumentos internacionales en materia de derechos fundamentales, tal es el caso de la declaración universal de los Derechos Humanos, la cual prescribe que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada de su familia, de su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques, esta disposición tiene su correlato en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos de 1966 y en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 los cuales son de igual de manera violados con las Reforma referentes, el Gobierno continúa su tránsito de un Estado garante a un contralor de la sociedad, el pretendido avance en materia de seguridad pública y de procuración de justicia no es hacer a partir y buscar remedios de fondo a la problemática como pudiera ser promoción del desarrollo, el crecimiento económico, el abatimiento a la pobreza, el combate a la corrupción y la profesionalización de los policías, si no que se formulan propuestas de corte exclusivamente normativo y que no resuelven deficiencias arraigadas, propuestas de corte exclusivamente normativo, que vulneran substancialmente las garantías ciudadanas, ante la ausencia de una política integral contra el crimen, asistimos al reforzamiento de un modelo legislativo putativo, en el que se otorgan más poder represivo al Estado y el decremento de las libertades públicas, una reforma Constitucional como esta sólo podrá entenderse, como la imposición de un Estado de excepción de garantías, en apariencia limitado, por, pero de frontera realmente difusas que pueden ser extendido de manera discrecional en perjuicio de las prerrogativas Constitucionales y derechos humanos de los ciudadanos y que en consecuencia dota al Estado de un poder represivo y brutal superlativo, por si no fuera suficiente existe un





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

proyecto de ley contra el crimen organizado que profundiza el camino trazado por la reforma, imputabilidad penal a partir de los 16 años, reserva de identidad y de testigos y jueces, sistema de recompensa para colaboradores o delatores, investigación encubierta, colaboración anónimas, incorrección de comunicación y vigilancia electrónica entre otros, en propuesta tales como la reducción de la edad penal, se actúa con tal desprecio al, al debate que sobre el tema se ha venido dando en nuestro país, no se toma en cuenta por ejemplo el bajo índice de proporcionalidad criminal de los jóvenes, ni lo contradictorio que resulta hacer imputable penalmente a un menor, que legalmente está impedido para casarse o para ejercer su voto, tampoco importa que de aprobarse esta iniciativa contravenga a disposiciones de la Convención de la ONU, por otra parte, es de señalarse el gravísimo error que implica la modificación en cuestión para los actos sociales que no están de acuerdo con las policías, las políticas desplazadas por el Gobierno, pues dichas disposiciones pueden ser utilizadas en contra sin ningún problema alguno, por ejemplo en el mes de marzo del año en curso apareció en los diarios de circulación nacional, una lista de personas y de organismos que de uno de los que se presume es de un cuerpo de inteligencia del Estado, y denominó enemigo del Gobierno y respecto de los cuales se desplegaban las labores de vigilancia y seguimiento de carácter claramente legal, ahora, la reforma de la Carta Magna permite que estos ciudadanos sean espiados e intervenidos sin ningún problema, luego de aprobarse esta iniciativa de Ley, contra el crimen organizado podrá ser fácilmente ubicados en las categorías de delincuentes organizados y de o de terroristas y ser sometidos a una implacable persecución con vistos de aparente legalidad, entonces realmente es la preocupación y por eso el Partido de la Revolución Democrática está en contra de esta reformas y estas adiciones. Es cuanto Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias Diputado, para intervenir a favor del Dictamen se le concede el uso de la voz, ahora al Diputado Bernardo Gómez Monreal.

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- Con su permiso Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Adelante Diputado.

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- Honorable Asamblea; en la actualidad el crimen organizado, tiene una indudable presencia en nuestro país y su actuación se demuestra en hechos como narcotráfico, secuestros asaltos y otros, por ello el Estado mexicano debe promover políticas que permitan enfrentar y combatir eficazmente este tipo de delincuencia, que ha modernizado sus modos operandi, de manera muy significativa, consecuente con la posibilidad de lograr mejores líneas de acción legal en contra de la delincuencia organizada, el estado mexicano hace suya, la necesidad de crear nuevos instrumentos jurídicos para una mejor procuración de justicia en beneficio de la





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

sociedad, la existencia de la delincuencia organizada permite fundadamente suponer en su disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos de mayor envergadura, lo cual conduce a la necesidad de legislar para establecer las bases que posibiliten la adopción de estrategias necesarias para enfrentar eficazmente este fenómeno, en función de una estrategia efectiva el Ejecutivo Federal, envió al Honorable Congreso de la Unión a finales de 1995 una iniciativa que reforma al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, así como diversas disposiciones reforman al Código Federal de Procedimientos Penales, entre las que destacan las relacionadas con el lavado del dinero, los inhalantes y los precursores químicos, también en agosto de 1995 la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados realizó una consulta nacional para definir estrategias y lineamientos para el combate del fenómeno del narcotráfico, en esta consulta los legisladores federales analizaron y discutieron la problemática ocasionada por este fenómeno social, que rebasa fronteras y que provoca alteraciones graves en el orden político, en la estabilidad económica y en la convivencia social, los legisladores concluyeron que el crimen, que el crimen organizado requiere para afrontarlo, de un esfuerzo multidisciplinario e internacional, también se sugirió que la legislación contemple procedimientos efectivos para contrarrestar la acción de grupos de delinquentes que trabajan con equipos y tecnologías sofisticados, la realidad impone que se adecuen nuevas formas de investigación que auxilien al ministerio público y a la policía, intervención de los medios de comunicación, instalación de programas de protección a testigos, reducción de penas para sujetos que colaboren con la justicia y regulación jurídica de policías encubiertos. La necesidad es imperante, el orden jurídico requiere de una revisión profunda para instaurar y adecuar disposiciones legales incluyendo a las Constitucionales que permitan combatir con eficacia, pero con pleno respeto al Estado de Derecho los malestares que provoca este fenómeno, como puede ser la introducción de disposiciones que reduzcan las penas de manera total o parcial a quienes contribuyan con la justicia en la persecución y desarticulación de organizaciones de esta índole, así como la creación de un sistema de recompensas a quien proporcione información válida sobre estas organizaciones la protección de testigos, la colaboración en forma anónima y la reserva de identidad como una forma que garantiza la seguridad, la intervención telefónica es un medio que permite a la autoridad investigadora allegarse elementos para cumplir con sus atribuciones, pero este instrumento deberá estar fundado y motivado en las causas legales del tipo de intervención, el sujeto pasivo de la acción fundamental y su duración para que queden establecidos con claridad los presupuestos básicos para su autorización, por parte de la autoridad judicial federal y con ello no se consulte la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Por otra parte existe un vacío legal que se creó con la Reforma de 1993 del Código de Procedimientos Penales para el D.F., en el sentido de que era procedente la libertad provisional bajo caución aún rebasándose el término medio aritmético de 5 años de prisión, siempre que no se tratara de delitos graves, situación que se ha deformado en la práctica al permitir la libertad de individuos que pueden aprovechar esta garantía para cometer nuevos ilícitos o para evadir la acción de la justicia, la iniciativa de Reforma regula la hipótesis de aplicación de la libertad provisional bajo caución de los delitos no graves y establecen cuales son los presupuestos para que ésta se dé, esto es cuando no exista una condena previa por delito y cuando no esté bajo proceso por la comisión de otro delito, también se prevé que podrá ser negada la petición debidamente





H. LEGISLATURA  
DEL ESTADO

razonada por el ministerio público en cuanto a la caución legal al ministerio público, la posibilidad debe aportar elementos para la fijación judicial de la misma y el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades, circunstancias del delito, las características del inculcado y del ofendido y los daños y perjuicios causados a este, así mismo se propone que la Ley determinará los casos en que el juez podrá revocar la libertad provisional y con ello ante varias hipótesis que pueden darse para revocar la libertad se evite que el inculcado disfrutando de dicho beneficio cometa otros delitos, la redacción de la Fracción XXI del Artículo 73 Constitucional, deja perfectamente establecida la atribución federal para conocer también de los delitos del fuero común, pero para garantizar a las Entidades federativas el orden jurisdiccional para el cumplimiento de sus funciones se delimita el criterio bajo el cual debe ejercer esta atribución el Honorable Congreso de la Unión, facultad que hasta ahora gozaba de un alto grado de discrecionalidad, en relación a las reformas del Artículo 16 consideramos que la intervención de comunicaciones telefónicas y de otros medios similares por parte de la autoridad competente constituyen una de las principales estrategias contra el crimen organizado que permiten recabar pruebas judiciales al interceptar mediante grabaciones, las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas o similares que se realicen por quienes colaboran o pertenezcan a este tipo de organizaciones, el tratamiento de esta reforma no es sencillo, la reforma provoca un creciente interés que origina opiniones encontradas sobre sus consecuencias, la prohibición nos conduciría a obstáculos en el diseño de medios eficaces del Estado para mejorar las tareas de investigación policiaca, regularlo puede llevarnos a la vulneración de las garantías individuales de los sujetos si no se realiza con minosisuidad, la desventaja que trae consigo la prohibición para el Estado implicaría la desventaja para la delincuencia organizada, en la actualidad esta delincuencia ufana de su poderío económico en el uso de las técnicas más sofisticadas en la interceptación de los medios de comunicación, aprovechando sin duda de los adelantos científicos y tecnológicos más recientes para evadir la acción de la justicia, la intervención telefónica de comunicaciones telefónicas y medios similares, cuyos tópicos considera necesario la legislación penal como elemento indiscutible de política anticriminal, provoca preocupación sobre su constitucionalidad donde se vierten opiniones encontradas que van desde la autorización con una base Constitucional, hasta los que piensan que es una práctica que vulnera los derechos individuales consagrados en la Constitución, las opiniones que se han vertido sobre la intervención de los medios de comunicación en el sentido de que se vulneraría la intimidad o la vida privada de las personas, es ciertamente factible si la reforma Constitucional no se hiciere con cuidado, existen opiniones que sostienen que como todo acto, que causa molestia debe fundarse y motivarse por mandamiento de autoridad competente como lo establece el primer párrafo del Artículo 16 Constitucional por esta razón, la regulación de la autorización para intervenir comunicaciones telefónicas y similares no puede ser contrario al espíritu de la Constitución, se considera conveniente entonces se adicione un párrafo noveno al Artículo 16 Constitucional para que se regulen expresamente las intervenciones de los medios de comunicación privados con una base Constitucional para cumplir los fines de la justicia la propuesta de reforma es precisa, la intervención de los medios de comunicación privada es un medio extraordinario de ayudarse de elementos que permitan al Estado cumplir con sus atribuciones, siempre actualizados por la autoridad judicial federal, lo que garantiza que esta práctica no se vuelva arbitraria, sancionando penalmente a quien sin cumplir las





formalidades de Ley lo hagan. Respecto al Artículo 20 Constitucional Fracción I se establece la libertad provisional otorgada bajo caución siempre y cuando no se trate de delitos que por su gravedad la Ley, expresamente prohíba conceder este beneficio, sin embargo, el ministerio público podrá solicitar al juez niegue la libertad provisional cuando el inculcado haya sido condenado con anterioridad por un delito grave o bien, cuando el ministerio público aporte elementos al juzgador estableciendo que la libertad del inculcado por su conducta circunstancias o características de delito conforma un riesgo para el ofendido o para la sociedad, el espíritu de esta disposición Constitucional versa sobre todo en los sujetos reincidentes y en la de conducta antisocial que presentan permanentemente, sobre el monto y la forma de caución, la disposición Constitucional sugiere que debe ser factibles para el inculcado de acuerdo a las circunstancias deben ser factibles para el inculcado, de acuerdo a las circunstancias la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución y para resolver sobre la forma y el monto de la caución el juzgador deberá considerar la naturaleza modalidades y circunstancias en que se desarrolló el delito además de las características del inculcado, la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones procesales y los daños y perjuicios del ofendido así como de la sanción pecunaria que pudiese imponerse al inculcado. De todas las especificaciones que establece la propuesta Constitucional, la Ley establecerá los casos graves, en los cuales el Juez estará facultado para revocar la libertad provisional del inculcado, la propuesta Constitucional sin duda es un avance en el rubro de la política anticriminal, la reforma al artículo 21 Constitucional dispone en el primer párrafo, que la imposición de las penas es exclusiva de la autoridad judicial y la persecución de los delitos incumbe al ministerio público y a la policía judicial la cual estará bajo el mando y autoridad de esta...

EL PRESIDENTE.- Diputado le comunico que le quedan 2 minutos para terminar su tiempo.

EL DIP. GÓMEZ MONREAL.- Gracias. Tradicionalmente se asigna el nombre de policía judicial a los cuerpos policiacos que auxilian al Ministerio Público para la averiguación de los delitos surgiendo de una estrecha vinculación con el Poder Judicial que en una época se encomendó a la investigación de los delitos, en la Constitución de 1917 la denominación ya no tenía una justificación sustentable dado que al encargarse la investigación de los delitos al ministerio público lo más lógico era que a la policía que lo auxiliase dependiese de él. Es necesario reafirmar la subordinación de una policía al ministerio público y por ello se estima conveniente que el artículo 21 Constitucional se refiere específicamente a un cuerpo policial que auxilia al ministerio público, el artículo 22 Constitucional prohíbe la confiscación de bienes como pena, sin embargo se acepta que por resolución judicial puede aplicarse total o parcialmente los bienes de una persona destinados al pago de responsabilidad civil que resulta de la Comisión de un delito, el pago de impuestos o multas o se decomisen en el caso de enriquecimiento ilícito conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución, la propuesta de reforma Constitucional al artículo 22 tiene como finalidad posibilitar la aplicación o decomiso de bienes involucrados por la delincuencia organizada y ser





susceptibles de asegurarse por la autoridad competente, el decomiso, establece la reforma constitucional, será siempre y cuando se haya sido condenado como miembro o responsable de la delincuencia organizada, el artículo 73 fracción XXI Constitucional, es favorable crear todo un orden jurídico que permita combatir a la delincuencia organizada es ineludible que ciertos delitos de competencia del fuero común sean del conocimiento de la autoridad federal, este planteamiento trae consigo reflexiones sobre la posible vulneración de las soberanías en las Entidades federativas, con el propósito de evitar la invasión de esferas de competencia que se han motivado con la aplicación del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece la facultad de atracción de la jurisdicción federal sobre los delitos de fuero común y es conveniente el establecimiento de la base Constitucional para su aplicación, la propuesta sobre la fracción 21 del artículo 73 constitucional establece la facultad del Congreso para que se definan los delitos y faltas contra la Federación además de instaurar las sanciones que deben imponerse por ellos. Las consideraciones y los planteamientos expuestos son prueba de la firme convicción del pleno respeto a la vigencia del Estado de derecho, acatamiento que comprende desde luego a las garantías individuales y derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano a todos los individuos, de manera que las reformas propuestas al texto de la Constitución del país no conceden como tampoco lo podrían hacer las leyes secundarias de él derivadas, ningún poder ilimitado, ni carta blanca para la intervención de comunicaciones privadas, sino antes bien, las mayores regulaciones, acotamientos, controles, penalidades y en general garantías precisas que hagan de esta posible intervención jurídica una verdadera excepción ante las necesidades provistas en la Ley. Es cuanto Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias señor Diputado. Se concede la palabra al Diputado José Guerrero Chávez que el se ha registrado para hablar en contra del referido dictamen.

EL DIP. GUERRERO CHÁVEZ.- Con su permiso Diputado Presidente.

EL PRESIDENTE.- Adelante Diputado.

EL DIP. GUERRERO CHÁVEZ.- Señores Diputados después de tanto discutir las mentadas reformas a la Ley en las cuales se está protegiendo a un grupo de personas que han sido las que siempre han causado, sobre todo el enfurecimiento de los mexicanos, ahora aquí en Zacatecas nos va quedando más claro de quien en realidad están protegiendo a la ciudadanía sin fijarse en la bandera de algún partido político, porque en Zacatecas siempre hemos estado en contra del espionaje telefónico y hoy que tenemos la oportunidad de repudiar estas detestables acciones, se haga lo contrario avalando lo que a todos los Zacatecas va a dañar, por que como puede ser posible que por algún interés particular de levantar la bandera de algún partido político se abra la puerta a que nuestras





conversaciones que deben de ser siempre completamente privadas tenga que ser escuchadas, a no ser compañeros Diputados que a nadie de ustedes les duela tener una conversación y esta sea escuchada por quien menos debe de interesarles esa conversación, pero en fin, el Partido de la Revolución Democrática está en completo desacuerdo y creo que es muy buena hora de demostrar cuanto nos interesa el bienestar de todos los ciudadanos, que ninguna culpa tienen de no estar bien representados en las diferentes Cámaras Diputados existentes en nuestra Nación, señores Diputados todavía es hora y antes de votar este Dictamen reflexionemos y pongámosle un hasta aquí a quien ha utilizado este sagrado recinto para fines en contra de los zacatecanos ya que lo injustificable no se puede justificar con mentiras. Es cuanto Señor Diputado.

EL PRESIDENTE.- Ha quedado debidamente registrada su intervención en el Diario de los Debates. Toca el turno en el uso de la Tribuna para hablar a favor del Dictamen al Diputado José Isabel Trejo Reyes.

EL DIP. TREJO REYES.- Con su permiso señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Adelante Diputado.

EL DIP. TREJO REYES.- Compañeros Diputados las reformas a los artículos 20, 21, 22 y 73 de la Constitución General de la República y que significan la base jurídica para la Ley Federal Contra el crimen organizado y que hoy discutimos aquí como parte del Constituyente Permanente, evidentemente debe ser también la prolongación del debate que se ha dado en el Congreso de la Unión y que aquí se ha hecho extensivo a foros públicos y medios de comunicación, las medidas propuestas en esta reforma han generado temor y críticas y desde luego que no son gratuitas, si este tipo de reformas pasaran como si nada sería altamente preocupante, por eso es necesario precisar lo mejor posible en que consisten dichas reformas, el debate público es indispensable y que bueno que se ha dado, por que si no eso significaría que habría una profunda ignorancia sobre el potencial abuso que tienen estas medidas si no se implementan bien, no es postura de nuestra fracción aprobar la reforma sin antes contemplar y precisar lo delicado que las medidas propuestas significan, sería inmaduro de nuestra parte no aceptar que tienen como lo dije un poco antes un potencial abuso, que estamos esperando también como lo señala el propio dictamen propuesto por dos miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Soberanía de Zacatecas sea contrarrestado por la Ley secundaria y la reglamentaciones correspondientes, eso significa que debemos estar pendientes para que se cumpla con sus fines que es combatir la delincuencia organizada y no se exacerben ni se salgan del límite para las que fueron creadas, en contraste tampoco podemos aceptar que las reformas se descalifique como una iniciativa de corte fascista, autoritaria y contraria a un estado democrático de derecho, esas son críticas sumamente ligeras, poco reflexivas con animosidad visceral que no parten de un análisis detenido, ni de los propios contenidos de





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

la Legislación vigente ni de los nuevos contenidos de las reformas Constitucionales y legales, las reformas Constitucionales tampoco son violatorias de las garantías individuales, las medidas propuestas se practican en países autoritarios, ciertamente pero no están legalizados en países democráticos, existen dentro de la Ley, no fuera de ella, existen con controles como ahora se plantea en la Reforma y existen en los países democráticos porque tienden a combatir a aquellos factores que de manera más grande amenazan la posibilidad democrática del Estado, yo creo que hay que entenderlo, en México se busca la transición entre este país autoritario y el régimen de simulación que lo favorece, a un régimen de leyes que apuntalan a los sistemas democráticos, yo creo que debemos entrarle pues al debate de esto que nosotros creemos que es sano, empezar abrir ya a la legalidad y que son ciertos esquemas que tienen una justificación y una necesidad, compañeros Diputados que se discuta pues esto, que se debata las cosas delicadas para el país, que estas son cosas delicadas, no es cierto que ahora aseveramos que la sociedad a madurado, eso es lo que decimos, pues dejemos de darle atole con el dedo a la sociedad pues, si hay necesidades y justificaciones tenemos que dialogar con serenidad y yo creo que tenemos que dialogar con serenidad temas delicados como este, a pesar de las descomposición que significa la crisis como la que estamos atravesando, hay que señalar también que la sentencias del tribunal europeo de derechos humanos en Estrasburgo declara conforme a derechos humanos todas y cada una de las medidas que aquí se proponen, la iniciativa de decreto que nos remite el Congreso de la Unión viene firmada por los Senadores del PRI, por los Senadores del PAN y por los Senadores del PRD y por Diputados del PRI y del PAN, tratando el punto número uno como antecedente de la introducción y justificación de los Senadores de la República para la reforma en mención, dice lo siguiente; la delincuencia organizada es sin duda uno de los problemas más graves por lo que atraviesa México y toda la comunidad mundial que en sus diversas manifestaciones entre las que destaca narcotráfico afecta las vidas de miles de seres humanos y atenta contra los principios básicos de la vida comunitaria y de la esencia del Estado, generando descomposición social e inestabilidad política, se trata además de un fenómeno de carácter transnacional que plantea incluso una amenaza directa para la estabilidad de las naciones y constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas de los Estados, los métodos y técnicas que se utilizan en las formas modernas de delincuencia, así como su realización cada vez más violenta y su internacionalización hacen que de la delincuencia organizada observe actualmente una mayor eficacia frente a los medios tradicionales del control estatal, por lo que estos también deben modernizarse para combatirla eficazmente, si ello no ocurre compañeros Diputados se debilita la capacidad efectiva del Estado para proteger los derechos fundamentales del ser humano, aquí pues, estamos legislando en materia de delincuencia organizada, la delincuencia organizada, ¿que es la delincuencia organizada? veamos algunos datos, llegaremos a algunas reflexiones para ubicar el problema en su exacta dimensión y contextualizar nuestra decisión de apoyar la iniciativa, la mafia no sólo el es un término de series policiacas, organizaciones como la Cosa nostra Siciliana, la Camorra Napolitana, el Yakusa Japonés, los Cáteles Colombianos, forman una lista negra donde ya se ubican las bandas delictivas mexicanas que han puesto en peligro la seguridad pública y hasta la seguridad nacional, en esas condiciones hay que recalcar que estamos en un momento de transición, estamos avanzando en la formación de otro sistema, la transición es el cambio de la reglas del juego, porque tal parece que las reglas de juego en estos momentos están en manos de hampa organizada, en





México operan ya bandas criminales de altísimas especialización en el manejo de armas de fuego, son organizaciones conformadas en su mayoría por policías y ex-policías que estarían actuando en contubernio en no pocas ocasiones con las mismas autoridades, el problema es tan grave que el propio Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet declaró públicamente que el crimen organizado nos lleva la delantera frente a tecnologías, medios, recursos y elementos de seguridad pública, la delincuencia organizada opera profesionalmente y no se limita a narcotráfico y secuestro, una de sus principales actividades es el atraco, el más rentable es el robo de vehículos y venta de autopartes que les deja ganancias por cerca de 3000 millones de dólares anuales, siguen en orden de importancia los atracos bancarios, en 1995 el asalto a 413 sucursales, es decir, 1.13 por día, dejó ganancias por 107 millones 944 mil, en los últimos ocho años se cometieron 768 atracos bancarios, así como a cajeros automáticos y cuentahabientes y fueron detenidos tres mil 723 delincuentes. Se mantienen en ascenso otros delitos como el asalto a choferes de trailers, robos a casas-habitación, establecimientos comerciales, tráfico de indocumentados, armas y contrabando, los métodos de estos grupos incluyen violencia, homicidios, extorsión, tortura e inclusive violación, estos delitos en su conjunto representan más del 50% de los 4 millones de delitos denunciados en todo el país y 61.2% de los 218 mil registrados en el Distrito Federal durante 1995. Una cosa es cierta, se descuidó un combate a la delincuencia organizada y ésta superó al ámbito policial y se incrustó en el político, al poner en riesgo la salud, seguridad y soberanía de nuestro país; se dejó crecer a organizaciones del crimen que actúan con la impunidad que les permite una legislación obsoleta, un sistema judicial por muchísimo tiempo burocrático e ineficiente, un aparato policial imprevisto y con un descuido profesional del 40 años, sin equipo, ni capacitación y una enorme desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, impunidad por lo que sólo se persigue e investiga a los responsables de menos del 30% de los secuestros, del 60% de los robos de autos, el 40% de hurto de autopartes y de un 75 a un 80% de los delitos en general a nivel nacional, durante prácticamente 40 años compañeros Diputados, se mantuvieron intactos una política, leyes y códigos elaborados en su mayoría durante la década de los 30 y 40 con reformas apenas instrumentadas a partir de 1989 y hasta 1993 el término crimen organizado apareció en la Constitución General con la reforma del artículo 16, el Estado reaccionó tardíamente para enfrentar una guerra abierta contra las grandes organizaciones criminales mexicanas, mientras el delincuente se organizó y especializó hay quienes sólo roban Spirit, quienes se dedican a las violaciones, a remarcar autos, a falsificar tarjetas de circulación, facturas, etc, mientras que el Ministerio Público se volvió todólogo, lo mismo atiende robos de auto y casa-habitación, como violaciones y homicidios. Hoy nos damos cuenta que la delincuencia organizada nos superó con mucho, se organizó, fue a las mejores universidades del crimen, consiguieron mejores armas, se prepararon, nos rebasaron en estrategia; en tanto los institutos de formación policiaca preparaban a un elemento en 20 días y entraba quien quisiera, reconozcámoslo compañeros Diputados; amplios sectores de la sociedad viven acorralados por organizaciones del crimen superiores, por mucho, en equipo, armas, elementos, preparación y estrategias de operación a nuestros policías. El poder económico de la mafias como las de narcotráfico y ladrones de vehículos y autopartes perfectamente organizados superaron 4.2 veces el presupuesto de seguridad nacional, 23.8 veces por arriba del asignado al Distrito Federal en el materia y más de mil veces lo aplicado en justicia y seguridad para Entidades como Michoacán, más de mil





LEGISLATURA  
DEL ESTADO

veces, la delincuencia organizada pues, esta demostrado, amenaza al estado de derecho que es exactamente lo que hace posible el respeto a las garantías individuales; un Estado de derecho que es lo que hace posible el bien común y el goce de los bienes públicos, el narcotráfico, por ejemplo, y solamente, tiene un potencial de peligro no sólo económico y social y de salud, lo tiene político, un potencial de peligro político en la medida que es un agente normalmente corruptor de muchas estructuras del Estado y enormemente generador de una violencia que afecta el sentimiento de seguridad básico de los ciudadanos; entonces de lo que se trata es, primero, de reconocer con estos datos que el problema de la inseguridad esta ahí y eso puede agravarse, por lo tanto es fundamental prever instrumentos adecuados y maduros ante realidades que se nos pueden venir encima, pero lo más urgente es frenar y tratar de revertir la situación preexistente a esta Ley en la medida de lo posible y detener el grado de deterioro que ya hay, eso plantea un escenario fundamentalmente represivo desde luego en contra de los delincuentes, ya se sabe que desde hace años se ha dicho que más vale prevenir que lamentar, pero a esa prevención en materia de delincuencia comenzó a tomar forma apenas hace unos años y sólo se daba en el discurso, es que el Estado por escasez de recursos y por un indebido ejercicio de prioridades hizo que la policía no sólo fuera reactiva sino muy poco profesional, la errónea práctica de correr policías sin ningún estudio previo fue algo que se revirtió porque los mandaron al mercado libre y eso fue privatización del autoritarismo y la arbitrariedad, para consolidar el respeto de los derechos humanos y la profesionalización de los cuerpos de estado, se necesita romper un régimen de normas perfectas que no se cumplen y pasar a otro de normas que puedan cumplirse y que tiendan a terminar situaciones de simulación de una investigación encubierta, poco profesional para hacerla mucho más evaluable, profesional y eficiente, para lograr ese estadio, es necesario cumplir por lo menos con dos condiciones, defender las posibilidades democráticas de México y defender una cultura de respeto a los derechos humanos y eso requiere de normas claras, precisas y de márgenes de acción de la autoridad dentro de la Ley que permiten eficiencia, sin violar las fronteras de lo que se puede y de lo que no se puede, fijar con toda claridad las fronteras de lo que se puede y no se puede es fundamental, evidentemente eso significa como debido entorno procurar condiciones económicas y sociales más sanas, porque el Estado pierde cuando se genera una economía alterna con base en el crimen, con grupos mucho más minoritarios de los que nos gobiernan ahora y con ello se pierde toda posibilidad de desarrollar un sistema económico, sano y creciente, lógicamente que para las reformas, que para que las reformas funcionen bien, es muy necesario, desde luego más independencia del ministerio público y obviamente al Poder Judicial, básicamente si no tenemos un sistema democrático de pesos y contrapesos y sin impunidades para nadie, la reformas siempre correrán riesgos y muy grandes, para que las leyes funcionen tienen que vincularse con el todo, con las políticas económicas, social, cultural, educativa, laboral, agraria, etc., eso es una política de prevención general, todos sabemos que la misma no es una solución aún cuando la Ley sea perfecta no va a lograr nada si los otros sectores de la justicia no funcionan adecuadamente, por eso es necesario primero; la existencia del marco normativo en el cual moverse de ahí pues, primero, compañeros Diputados, la Ley y sin este tipo de medidas legales no se puede investigar el crimen organizado, la experiencia internacional nos dice que estas no son la únicas medidas para combatir, apenas son la medidas operativas para enfrentarlo, el crimen organizado es toda una realidad cultural y se enfrenta con otra serie de resistencias culturales, es menester





H. LEGISLATURA  
DEL ESTADO

por lo tanto que cada quien en forma responsable cumpla su función por el bien de México nosotros como Diputados es nuestra responsabilidad, nosotros aprobaremos la reforma, entendiendo que la democracia representativa evidentemente tiene riesgos, solamente quisiera aclarar que esta reforma viene aprobada por Senadores del PRD, inclusive la Ley secundaria, la Ley secundaria, para que se establezca que autoridades federales deben encauzar las autorizaciones para la intervenciones telefónicas, es una propuesta del Coordinador de los Senadores del PRD, es cuanto Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias Diputado Trejo, su intervención ha quedado debidamente registrada....

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Señor Presidente para aclaración de hechos.

EL PRESIDENTE.- Sí Diputado, para..... tiene de máximo cinco minutos Diputado, de acuerdo al Artículo 113 de nuestro Reglamento Interior.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Con su permiso Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Adelante Diputado.

EL DIP. ESPARZA GARCÍA.- Efectivamente como lo decía el Diputado Trejo Reyes, el coordinador de la fracción en el Senado, el Dip. Héctor Sánchez firmó el documento, nada más que falta algo que agregar: el Senador Héctor Sánchez preocupado efectivamente por la delincuencia organizada, que inclusive en este sexenio desgraciadamente ha crecido, e inclusive las mismas corruptelas en la policía judicial han crecido, vio la oportunidad y responder a la responsabilidad y encarar de una vez por todas, para combatir la delincuencia organizada, pero no nada más era reformar, o la propuesta no nada más reformar estas leyes, si no también la propuesta del Senador, era también encaminada a proponer una reforma económica, donde pueda sacar de la marginalidad a muchos mexicanos que se ven en peligro de ser atentados por los capos de la droga, que son atentados a participar de la delincuencia, precisamente por su situación económica y por la situación que esta imperando en el país, entonces es menester o era la propuesta, de incorporar a la par la reforma y adiciones a esta Ley y a la par también buscar los mecanismos de solución a la marginación que existe en nuestro país, esa también era la propuesta es la decisión también del Dip. Héctor Sánchez, y aquí está en el Diario de los Debates, del Senado donde dice porque, porque hace y porque firmó la propuesta de reforma. También creemos que es necesario abundar en esto, que aparte de que están





H. LEGISLATURA  
DEL ESTADO

reformando, adicionando estos artículos, también es necesario y eso aquí como legisladores nos debe de preocupar, tenemos que buscar los mecanismos para reactivar la economía de nuestro país, de nuestro Estado, porque ayer vimos con preocupación, precisamente, que a lo mejor ayer en San Nicolas de los Garzas, Nuevo León, este, hubo ahí unos criminales organizados, yo creo que fue la pobreza generalizada, lo que motivo que asaltaran un vagón del ferrocarril con maíz, esa es la realidad del país, eso es lo que debemos de reformar, eso es lo que debemos de reformar, eso es lo que nos debe de preocupar, que realmente la política económica de Carlos Salinas de Gortari, avalada y fomentada por muchos mexicanos ha hecho estragos en nuestro país y es el peligro que tenemos aquí en Zacatecas, que se repita lo de San Nicolas de los Garzas y no solamente Zacatecas, sino en todo el país, es cuanto Señor Presidente.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias Diputado, para finalizar con la lista de oradores inscritos se concede la palabra al Diputado Daniel Huerta Enríquez, quien se ha registrado para hablar a favor del mencionado dictamen.

EL DIP. HUERTA ENRÍQUEZ.- Con su permiso Diputado Presidente.

EL PRESIDENTE.- Adelante Diputado.

EL DIP. HUERTA ENRÍQUEZ.- Da lectura a su intervención. ( LA CUAL SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA).

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias Diputado, su intervención a quedado debidamente registrada y se le dará el trámite correspondiente, concluida la lista de oradores esta Presidencia pregunta a la Asamblea si considera suficientemente discutido el Dictamen en lo general, quienes estén por lo afirmativo, sírvanse manifestarlo en forma económica. Muchas gracias. Aprobado Diputados. Se somete ahora a votación nominal en lo general por mi derecha y pido al Segundo Secretario tomar nota e informar del resultado a esta Presidencia.

FRÍAS SESMA JOSÉ.- Aprobado.

ULLOA REYES JOSÉ FRANCISCO.- Aprobado.

AGUILAR MERCADO FORTUNATO.- Aprobado.

MÁRQUEZ SÁNCHEZ VICENTE.- Aprobado.



dictamen en lo general.

GONZÁLEZ ESPINOSA CARLOS.- Aprobado.

SÁNCHEZ GARCÍA JESÚS.- Aprobado.

LUIS ALFREDO CHÁVEZ GONZÁLEZ.- Aprobado.

BONILLA PÉREZ FRANCISCO JAVIER.- Aprobado el

BUENROSTRO DE LA PEÑA JAIME.- Aprobado.

RODRÍGUEZ ACEVEDO RUBÉN.- Aprobado.

CHÁVEZ ANAYA RAMIRO.- Aprobado.

DELGADILLO BERNAL ANTONIO.- Aprobado.

FLORES CHÁVEZ MARCO VINICIO.- Aprobado.

MARTÍN CARRILLO.- Aprobado.

BERNARDO GÓMEZ MONREAL.- Aprobado.

JESÚS PADILLA.- Aprobado.

GONZÁLEZ RANGEL ROBERTO.- Aprobado.

DÉVORA RODARTE.- Aprobado.

VILLELA SIFUENTES ARTURO.- Aprobado.

MÁRQUEZ VALERIO URIEL.- Aprobado.

RAÚL FLORES MURO.- Aprobado.

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ GUADALUPE.- En contra.

TREJO REYES JOSÉ ISABEL.- Aprobado.

HUERTA ENRÍQUEZ DANIEL.- Aprobado.

ESPARZA GARCÍA HUGO.- En contra.





H. LEGISLATURA  
DEL ESTADO

JOSÉ GUERRERO CHÁVEZ.- En contra.

RUELAS RANGEL HUGO.- Aprobado.

MUÑOZ VALENZUELA FRANCISCO JAVIER.-

Aprobado.

SILVA MERCADO MANUEL.- Aprobado.

EL SEGUNDO SECRETARIO.- Diputado Presidente para informarle que son 26 votos a favor y tres en contra.

EL PRESIDENTE.- Muchas gracias Diputado Secretario, de acuerdo con el resultado de la votación y en base a lo establecido por el artículo 116 de nuestro Reglamento Interior se declara aprobado el dictamen en lo general, se somete ahora el Dictamen a discusión en lo particular, los Diputados que deseen intervenir, favor de inscribirse en esta Mesa de Debates mencionando los artículos o considerandos que deseen impugnar. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por el artículo 118 de nuestro Reglamento Interior se tiene por aprobado en lo particular y se remite el mismo a la Oficialía Mayor para la elaboración de la Minuta de Decreto correspondiente y ser enviado al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado. Continuando con el Orden del Día pasamos al último punto que se refiere a Asuntos Generales, tiene la palabra esta Honorable Asamblea. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el Orden del Día se levanta la Sesión y se cita a los Ciudadanos Diputados para el próximo miércoles 5 de junio del año en curso a la hora reglamentaria. Muchas gracias Diputados.

DIPUTADO PRESIDENTE

DR. MANUEL SILVA MERCADO.

DIPUTADO SECRETARIO

M.V.Z. JOSÉ FRÍAS SESMA



H. LEGISLATURA  
DEL ESTADO

DIPUTADO SECRETARIO

DR. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ  
VALENZUELA